

Presupuestos generales

TARDE PERO CHAPUZA

RAMIRO CRISTOBAL

CON el país a punto de marcharse de vacaciones veraniegas el Congreso de los Diputados se dispone a discutir los Presupuestos Generales del Estado. Lo malo es que va a tener que hacerlo en dosis masivas, porque estos presupuestos de ahora son los correspondientes a 1979 y muy probablemente, a principio de otoño deberá comenzar con los de 1980. No sé quién dijo que la economía va a protagonizar la escena parlamentaria española de aquí en adelante y va a ser una frase que tendrán ocasión de recordar los señores diputados.

El caso es que cuando ya desesperábamos de tener un cálculo presupuestario del Estado para este año, la Comisión correspondiente, con el defenestrado Fernández Ordóñez a la cabeza, se sacó de la manga en horas veinticuatro —como Lope sus comedias— un presupuesto de circunstancias. Había prisa y así, con unas concesiones a la minoría catalana que representaba Trías Fargas —trilateral, él— y otras a los socialistas, UCD sacó adelante el proyecto. Fernández Ordóñez y su hombre fuerte del partido en esta Comisión, Alberto Oliart, les ganaron por rapidez a los demás.

Como no todo iba a ser malo, los redactores del presupuesto llevan algunas ventajas; tales como encontrarse a dos pasos de conocer el índice de inflación del primer semestre y contar con una determinada política monetaria del sector público en el primer semestre. En estas circunstancias decidirse por un presupuesto más o menos expansivo, más o menos intervencionista debe carecer de secreto. Es como aquello de ir a vendimiñar y llevarse uvas de postre.

La vista atrás

Muy otro era el panorama a fines del año pasado, cuando el Gobierno tenía que elab-

orar un presupuesto que resultara razonablemente acorde con las previsiones económicas para este año. Entonces, el ministro de Hacienda, obsesionado por el eterno problema de la inflación, presentó un presupuesto enormemente conservador en el que apenas se tomaban en cuenta las disponibilidades monetarias para lograr una reactivación del mercado. Sobre un total de gastos presupuestarios de un billón setecientos treinta y dos mil millones, calculaba un

mida, particularmente en lo concerniente a la deuda pública, y a la recurrencia al Banco de España. En opinión del PSOE había que elevar el déficit presupuestario a 102.000 millones y el Fondo de Acción Coyuntural a 120.000. Un déficit total de 222.000 millones era más adecuado para una economía necesitada de expansión y con el problema del paro como prioritario. Enrique Barón explicó entonces, en una rueda de prensa, cómo su partido no sólo deseaba este

de impuestos directos e indirectos.

El economista Miguel Boyer dijo que era "absurdo presentar unos presupuestos sin que les haya precedido una clara exposición de los objetivos, previsiones y forma de aplicación de la política económica del Estado. Estos presupuestos representan además un corsé a las negociaciones que han de realizar sindicatos, patronales y Administración, cuyo resultado está aún por ver y que pueden significar el trastoque de todo lo presupuestado". Mira por donde, las cosas iban a ser al revés: al final han sido aquellas negociaciones las que han acabado por ser el condicionante de los presupuestos.

Un paréntesis prolongado

Claro que todo lo antedicho fueron, en definitiva, ganas de gastar saliva. Los presupuestos (ni los de UCD, ni los del PSOE) no llegaron a presentarse, y mucho menos a aprobarse. Llegó la convocatoria de elecciones, se disolvieron las Cortes y todo quedó en suspenso, primero para marzo y luego para abril. Mientras, con toda alegría, se prolongaron los presupuestos del 78.

En estos cinco, casi seis meses, en que se tardó en volver sobre el asunto, el equipo económico hizo gala de su capacidad para planificar compartimentos estancos de la economía nacional, sin conocer los datos de otros que podrían modificarlos. Si algo está en las antipodas de una planificación global como debe ser, es lo que se ha hecho en estos meses. Así, el ministro Fernando Abril se comprometió ante el país a que el crecimiento del índice del coste de la vida no pasaría, este año, de un 13 por 100 y se empeñó en conseguirlo a través de la técnica elemental de actuar sobre los precios



déficit de setenta y cuatro mil millones, al que había que sumar el llamado Fondo de Acción Coyuntural que se calculaba en ochenta mil millones. Este déficit total de ciento cincuenta y cuatro mil millones se proyectaba enjugar por parte del Gobierno recurriendo a la deuda exterior (22.000 millones); a la deuda interior (50.000) y al Banco de España (82.000 millones).

Ya entonces los economistas del PSOE hicieron un duro enjuiciamiento de esta propuesta gubernamental a la que consideraban harto tí-

incremento del Fondo de Acción Coyuntural (vivienda, obras públicas, INI, urbanismo y agricultura), sino que los mismos gastos corrientes y de capital del presupuesto deberían ser incrementados en 58.000 y 20.000 millones, respectivamente, que deberían destinarse a combatir el paro (30.000 millones) retribución de funcionarios, sanear las economías de los entes de la Administración local y creación de puestos escolares. Pensaban los socialistas que podría conseguirse un ingreso adicional de 50.000 millones a base

controlados y el índice salarial. El hecho de que el presupuesto sea inflacionista o no y en qué medida, se ignora, dado que, como queda dicho, no hay presupuesto. En este clima se comenzó la negociación de los pactos entre trabajadores y empresas con el borroso tope indicativo gubernamental. Se consiguió más o menos que las centrales sindicales no se pasaran en sus peticiones y se les volvió a prometer que los trabajadores no perderían capacidad adquisitiva dado el antedicho índice inflacionista. Por lo demás, al carecer de una política económica mínimamente expansiva y en el afán de mantener bajo el índice de inflación, se produce la cómica acumulación de reservas (más de 11.000 millones de dólares, según los últimos datos) con las que no se sabe o no se quiere hacer algo.

Por si fuera poco, a Suárez se le ocurre cambiar al equipo económico que a falta de método más racional se defendía llevando adelante las parcelas particulares de sus Ministerios. Entra así un nuevo equipo, que no sólo ignora en qué estado se encuentran las cosas, sino que, además, en caso de querer partir de cero le sería imposible.

Parches y chapuzas

En estas condiciones es en las que se ha llamado de nuevo (Suárez le dijo a Abril que dijera a García Añoveros que dijera a... a Fernández Ordóñez para elaborar el presupuesto. Pero ahora los datos no eran futuribles: estaban ahí.

Para empezar y con datos del primer cuatrimestre, el crecimiento tributario era menos optimista de lo que se prometían unos y otros. No es que haya estado mal, pues un 11,6 por 100 sobre el mismo período del pasado año no deja de ser algo, pero es patentemente inferior al 30 por 100 de más que se obtuvo en similar lapso de tiempo de 1978 sobre 1977. Se dice que los contribuyentes acusaron el cambio de actitud fiscal; este año, el temor ha sido más tenue, al parecer. En cuanto al déficit presupuestario que como queda dicho se calculaba en 74.000 millones para todo el año, ha ascendido en sólo

L OS Ministerios de Agricultura en este país nos tienen acostumbrados a todo. Menos a una cosa: la elaboración de un plan global de reforma agraria. Háblanos visto de todo —incluso la formación del FORPPA— menos que un ministro, como si fuera alumno aventajado de don Pascual Carrión, se saliera con que los males del campo español proceden de las multinacionales intermediarias y de los latifundios improductivos. O como ahora se llaman, con delicioso eufemismo, "fincas manifiestamente mejorables".

El ministro Lamo de Espinosa lo hizo. Y con bastante estilo y coherencia. Su diagnóstico no dejó nada que desear: envejecimiento de la población agraria, crecimiento costo de maquinarias y productos químicos, márgenes crecientes entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor, incidencia de las importaciones, falta de elementos de financiación y estructura social injusta. Su receta también fue aceptable: una serie de leyes, en activo antes de fines de este año, que logren la puesta en valor de la tierra no cultivada, el acceso de agricultores jóvenes, reestructurar el mercado agroalimentario y eviten la erosión y desertización del territorio. Hasta aquí nada que objetar.

Está por ver cuánto se puede hacer de lo dicho, también por el ministro. Por ejemplo, las poderosas multinacionales y los "holding" que hacen de intermediarios en el campo, son, a la vez, frecuentes valedores de UCD. ¿Cómo es posible creer que un Gobierno va a dañar los intereses de su base sustentadora? ¿Y cómo es posible creer que los intereses del capitalismo latifundista van a ser atacados de frente por un ejecutivo ideo-

cuatro meses a 108.019 millones y el déficit total del sector público (añadiendo el Fondo de Acción Coyuntural) que se calculaba en 154.000 millones para la anualidad, asciende en cuatro meses a 162.621 millones, superando así las más enfebrecidas previsiones del PSOE. Por lo demás, es muy posible que se sobrepase el 6,5 por 100 de inflación en el primer semestre y el Gobierno tenga que enfrentarse a cara descubierta con las centrales sindicales y revisar los convenios.

El Gobierno, pues, ha de-

cidido enmendarse y eso se notará en el presupuesto. Para empezar, ha decidido que la intervención del sector público en la segunda mitad del año debe ser mínima y dejar el campo libre a la inversión privada. Es seguro que habrá una política monetaria más restrictiva que nunca si se desea que se haga más lento el crecimiento acelerado del índice de precios. Tanto el déficit del sector público como el del presupuesto no debe crecer mucho más, pues no parece aconsejable —desde la peculiar visión UCD, claro está— el acu-

Requiem por un campo español

lógicamente tan próximo? El diputado comunista Ignacio Gallego, que intervino tras el ministro, preguntaría amargamente: "Díganos, por favor, señor Lamo de Espinosa: ¿Si o no vamos a tener solución al grandísimo problema de las fincas manifiestamente mejorables? ¿Tantas dificultades existen para componer un catálogo de esas fincas?". Porque es de advertir que este problema está en el Congreso tal como se quedó en los pactos de la Moncloa y fue paralizado por una enmienda a la totalidad de UCD.

En fin, como la esperanza es lo último en perderse, y como en España estamos bastante pertrechados de paciencia, parece haberse dado un margen de confianza a los proyectos del ministro, aunque sólo sea por el contraste entre su exposición y la de los también ministros Leal y Bustelo, que tuvieron que retirarse por el foro prometiendo que la próxima vez se traerían mejor aprendida la lección; en este caso, el plan económico y energético del Gobierno. Lo de Lamo de Espinosa es otra cosa y al menos sobre el papel resulta bello.

Claro que ha habido reticencias y algunas muy serias. Como la planteada por el catalán José María Culler, que no se explicaba cómo todos aquellos proyectos no aparecían reflejados en los presupuestos del Estado. O la del vasco Iñigo Aguirre, del PNV, que pedía un acortamiento de los plazos por si acaso daba tiempo a coger algo antes de que llegaran los malos tiempos.

Cuando acabó la sesión dicen que un diputado socialista murmuraba a sus allegados: "Nosotros firmaríamos ahora mismo ese programa. El único problema reside en que UCD también lo firme". ■ R. C.

dir mucho más a la deuda pública y al Banco de España. De las reservas, que han de incrementarse notablemente si se produce, como se prevé, una buena temporada turística, no se ha vuelto ni a hablar.

Lo peor es que los resultados de las alegrías del sector público no se ven por ninguna parte, y ahora que se pasan los trastos de matar a los empresarios, no ven por dónde torear al toro. Resulta que hemos estado en el país de la leche y de la miel y no nos habíamos enterado. La vida es así. ■